



Roj: **STSJ CAT 4089/2015 - ECLI: ES:TSJCAT:2015:4089**

Id Cendoj: **08019340012015102698**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social**

Sede: **Barcelona**

Sección: **1**

Fecha: **07/04/2015**

Nº de Recurso: **31/2015**

Nº de Resolución: **2397/2015**

Procedimiento: **Recurso de suplicación**

Ponente: **LIDIA CASTELL VALLDOSERA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

RM

Recurs de Suplicació: 31/2015

IL·LM. SR. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO

IL·LM. SR. FRANCISCO BOSCH SALAS

IL·LMA. SRA. LÍDIA CASTELL VALLDOSERA

Barcelona, 7 d'abril de 2015

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 2397/2015

En el recurs de suplicació interposat per Cast-Info, S.A., Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Informàtica El Corte Inglés, S.A., Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i Serikat Consultoria e Informatica, S.A. a la sentència del Jutjat Social 1 Barcelona de data 28 de juny de 2013 dictada en el procediment núm. 786/2011, en el qual s'ha recorregut contra la part Mariano , Millán , Ministerio Fiscal i Rafael , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. LÍDIA CASTELL VALLDOSERA .

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre acomiadament en general, la qual l'actor al·lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 28 de juny de 2013 , que contenia la decisió següent:

" **PRIMERO** .- El demandante Mariano inició prestación de servicios para la demandada SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, SA., (en adelante SERIKAT), en fecha 28 de mayo de 2007, suscribiendo contrato de trabajo por obra y servicio "para **IECISA**. Proyecto "Administración de los Sistemas informáticos del Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya en entorno Windows", que posteriormente devino indefinido, con la categoría profesional de técnico de sistemas y con un salario de 2.000 euros mensuales brutos con inclusión de gratificaciones extraordinarias.



El demandante Millán inició prestación de servicios para la demandada SERIKAT en fecha 20 de julio de 2009, suscribiendo contrato de trabajo por obra y servicio "para **IECISA**. Proyecto "Administración de los Sistemas informáticos del Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya en entorno Windows", que posteriormente devino indefinido, con la categoría profesional de técnico de sistemas y con un salario de 1.683,34 euros mensuales brutos con inclusión de gratificaciones extraordinarias.

El demandante Rafael inició prestación de servicios para la demandada CAST-INFO, SA. en fecha 25 de agosto de 2008, con la categoría profesional de técnico de sistemas y con un salario mensual de 2.500 euros brutos con inclusión de gratificaciones extraordinarias (hecho primero de cada una de las demandas acumuladas, en extremos no controvertidos).

SEGUNDO .- Mediante sendas comunicaciones escritas de fecha 27 de junio de 2011, notificadas el mismo día a los actores Mariano y Millán , respectivamente, la empresa SERIKAT ha procedido a despedirlos, por causas objetivas, con efectos del propio día 27 de junio de 2011, en base a lo previsto en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores (cartas de despido obrantes a folios 1.575-1.576, 1.578-1.579 y 3.390 a 3.393, que, dada su extensión, se dan por íntegramente reproducidas).

TERCERO .- Al tiempo de notificar a los dos actores su despido, la demandada SERIKAT ha puesto a disposición de cada uno de ellos las cantidades que, por indemnización y falta de preaviso, se hacen constar en cada una de las respectivas cartas de despido (documentos obrantes a folios 1.577, 1.580, 3.396 y 3.397, no controvertido).

CUARTO .- La demandada SERIKAT ha despedido en la misma fecha de 27 de junio de 2011 y mediante sendas cartas de despido, de idéntico contenido a las entregadas a los actores Mariano y Millán , a otros tres trabajadores que prestaban servicios en el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya y en relación a su sistema informático (cartas de despido, obrantes a folios 1.581 a 1.586).

QUINTO .- Mediante comunicación escrita de fecha 28 de junio de 2011, notificada el mismo día al actor Rafael , la empresa CAST- INFO, SA. ha procedido a despedirlo, por causas objetivas, con efectos del propio día 28 de junio de 2011, en base a lo previsto en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores . El mismo día 28 la empresa ha entregado al Comité de empresa copia de la carta de despido del trabajador (carta de despido obrante a folios 1.037-1.038 y 3.394- 3.395, que se da por íntegramente reproducida).

SEXTO .- Al tiempo de notificar al actor Rafael su despido, la demandada CAST-INFO, SA. ha puesto a su disposición las cantidades que, por indemnización y falta de preaviso, se hacen constar en la carta de despido (documentos obrantes a folios 1.040, 1.041 y 3.398 a 3.400, no controvertido).

SÉPTIMO.- El entonces Departament de Política Territorial i Obres Públiques (hoy de Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de Catalunya adjudicó a la codemandada INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA. (en adelante **IECISA**), en el año 2009, el lote 2 de las prescripciones técnicas del concurso relativo a los servicios de las TIC del Departament, consistiendo dicho lote en la prestación de servicios TIC de gestión de sistemas, parque informático, explotación y red (Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, obrantes a folios 159 a 268, 584 a 693, 1.904 a 2.013 y 2.218 y siguientes).

Consecuencia de dicha adjudicación, en fecha 4 de noviembre de 2009 se suscribió contrato administrativo entre el Departament indicado y la mercantil **IECISA**, para la prestación de los servicios a que se refiere el lote 2, fijándose un término de duración del contrato desde 19 de noviembre de 2009 hasta 31 de diciembre de 2011 (contrato obrante a folios 269-270 y 2.210 a 2.212 y resolución de adjudicación, folios 2.213 a 2.217, que se dan por reproducidos).

OCTAVO .- En 1 de octubre de 2006 las codemandadas **IECISA** y SERIKAT suscribieron un denominado "Contrato de prestación de servicios informáticos y cesión de derechos de propiedad intelectual" (contrato obrante a folios 1.610 a 1.620, que se da por reproducido).

En 1 de junio de 2007 ambas codemandadas suscribieron un contrato de "Condiciones Generales para la prestación de Servicios Informáticos", en virtud del cual esta mercantil, la contratista, ejecutará los servicios informáticos que le requiera aquélla, el cliente (contrato obrante a folios 272 a 290, que se da por reproducido).

Consecuencia de la adjudicación por el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (hoy de Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de Catalunya a la codemandada **IECISA**, en el año 2009, del lote 2 de las prescripciones técnicas del concurso relativo a los servicios de las TIC del Departament, esta mercantil suscribió, en fecha 19 de noviembre de 2009, con SERIKAT un denominado "Anexo al Contrato de prestación de servicios informáticos suscrito en 1 de junio de 2007", para la prestación de dichos servicios en el Departament, en las oficinas sitas en Josep Tarradellas 2-4-6 de Barcelona, por una duración de un año, que en 19 de noviembre de 2010 se prorrogó por otro año, estimándose la finalización en 18 de noviembre de 2011 (documentos obrantes a folios 291 a 302 y 1.622 a 1.633, que se dan por reproducidos).



La mercantil SERIKAT facturaba a **IECISA** y ésta le pagaba el precio convenido en función de las horas trabajadas, sin considerar ninguna otra circunstancia (interrogatorio del representante de **IECISA** y testifical de Antonio , director de la delegación de Barcelona de la mercantil SERIKAT).

NOVENO .- En 1 de diciembre de 2007 las codemandadas **IECISA** y CAST-INFO, SA. suscribieron un contrato de "Condiciones Generales para la prestación de Servicios Informáticos", en virtud del cual esta mercantil, la contratista, ejecutará los servicios informáticos que le requiera aquélla, el cliente (contrato obrante a folios 697 y siguientes y 923 a 931, que se da por reproducido).

Consecuencia de la adjudicación por el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (hoy de Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de Catalunya a la codemandada **IECISA**, en el año 2009, del lote 2 de las prescripciones técnicas del concurso relativo a los servicios de las TIC del Departament, esta mercantil suscribió, en fecha 1 de marzo de 2010, con CAST-INFO, SA. un denominado "Anexo al Contrato de prestación de servicios informáticos suscrito en 1 de diciembre de 2007", para la prestación de dichos servicios en el Departament, en las oficinas sitas en Josep Tarradellas 2-4-6 de Barcelona, por una duración de un año, que en 1 de marzo de 2011 se prorrogó por otro año, estimándose la finalización en 31 de diciembre de 2011 (documentos obrantes a folios 717 a 720 y 936-937, que se dan por reproducidos).

DÉCIMO .- En virtud de los referidos contratos, los dos primeros actores, en tanto que empleados de SERIKAT (junto con otros trabajadores de esta empresa), y el tercer actor, en tanto que empleado de CAST-INFO, SA., han venido prestando sus servicios informáticos en el Departament de la Generalitat de Catalunya demandado, desde el inicio de su relación laboral (no controvertido).

DÉCIMO PRIMERO .- Con anterioridad a que se adjudicara a la demandada **IECISA** la prestación de los servicios TIC de la Generalitat, se había adjudicado directamente a la demandada SERIKAT. En posteriores concursos también ha participado, pero se han adjudicado a **IECISA** (testifical de Antonio , director de la delegación de Barcelona de la empresa SERIKAT).

DÉCIMO SEGUNDO .- CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (en adelante CTTI) es una empresa pública, que lleva a cabo la gestión de los servicios informáticos de la Generalitat de Catalunya (folios 1.839 y siguientes, repetidos en 2.042 y siguientes).

El CTTI debe informar cuando los distintos Departaments de la Generalitat tengan que licitar o contratar la gestión de los servicios TIC. Y en concreto emitió informe técnico, incluido en el Pliego de condiciones del concurso que concluyó con la adjudicación por el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (hoy de Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de Catalunya a la codemandada **IECISA**, en el año 2009, del lote 2 de las prescripciones técnicas del concurso relativo a los servicios de las TIC del Departament. Además le corresponde la coordinación y comprobación de que se cumple el contrato, marcando las directrices tecnológicas y el seguimiento del servicio previsto en Pliego de condiciones (documentos obrantes a folios 1.856 y siguientes y repetidos en 2.041 y siguientes).

DÉCIMO TERCERO .- Los tres actores han prestado servicios en los centros de trabajo del Departament de la Generalitat demandado, en Josep Tarradellas y calle Aragón, desde el inicio de su relación laboral y hasta junio de 2011 (no controvertido).

Los útiles, instrumental, equipos de trabajo, ordenadores y programas eran todos propiedad de la Generalitat, de acuerdo con el Pliego de condiciones, hasta junio 2011 (no controvertido).

Los actores disponían de acceso a la intranet del Departament y tenían una cuenta de correo electrónico de la Generalitat. Y participaban en los cursos y programas de formación junto con el personal del Departament (correos obrantes a folios 3.030-3.031 y 3.052 a 3.078, no discutidos por las demandadas).

DÉCIMO CUARTO .- Eduardo , empleado de **IECISA**, era el responsable de dicha empresa del proyecto de la adjudicación por la Generalitat de Catalunya del lote 2 de las prescripciones técnicas del concurso relativo a los servicios de las TIC del Departament. En alguna ocasión se dirigía a los actores para hacerles indicaciones relativas al trabajo, siempre en función de los requerimientos de Ezequias , de CTTI (testifical de Eduardo y correos obrantes a folios 3.231, 3.233, 3.243, 3.248, 3.250, 3.254, 3.277, 3.279 y 3.281, que se dan por reproducidos).

DÉCIMO QUINTO .- Ezequias ha sido empleado del CTTI desde el año 2006 hasta el año 2012. Era el responsable del Área técnica de dicho Centro, que supervisaba la prestación de los servicios informáticos adjudicados por el Departament de la Generalitat demandado a la mercantil **IECISA**, en los términos previstos en el Pliego de condiciones del concurso (testifical de Ezequias).

Ezequias era la persona que daba las instrucciones del trabajo diario a los actores, mediante constantes órdenes e indicaciones, incluso en ocasiones con recriminaciones y exigencias propias del superior jerárquico,



siendo la comunicación mediante correos electrónicos, casi diarios, debiendo dar cuenta los actores de su trabajo al señor Ezequias . Ninguna otra persona, ni de la mercantil **IECISA**, ni de las respectivas empleadoras de los actores, les daba concretas órdenes del trabajo diario que tenían que llevar a cabo los demandantes, con la salvedad de lo indicado en el hecho anterior respecto de Eduardo (correos electrónicos obrantes a los folios 3.080 a 3.199, que se dan por reproducidos, reconocidos algunos expresamente por Ezequias en su declaración testifical, que ha manifestado no recordar exactamente otros).

DÉCIMO SEXTO .- Las vacaciones y otras fiestas de los actores, sin perjuicio del control que de las mismas hicieran sus formales empleadoras, tenían que estar aprobadas por Ezequias , responsable del CTTI y se le comunicaban a Eduardo , de **IECISA** (correos obrantes a folios 375, 376, 792, 968, 969 y 3.201 a 3.226, que se dan por reproducidos).

DÉCIMO SÉPTIMO .- En fecha 30 de diciembre de 2010 se ha presentado en el Departament de la Generalitat demandado escrito de fecha 22 de diciembre de 2010, del Sindicato **CNT**, por el que se le comunica que en fecha 30 de noviembre de 2010 se ha constituido la sección sindical de **CNT** en el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que está integrada por los tres actores (documentos obrantes a folios 2.329 a 2.334, que se dan por reproducidos). Igualmente se ha remitido copia de dichos documentos a la codemandada CAST-INFO, SA (folios 985 a 991), y a la codemandada SERIKAT (folios 1.658 a 1.664).

Los actores han solicitado al Departament demandado, en enero de 2011, sendos tablones para la sección sindical de **CNT**, en cada uno de los centros, de calle Aragón y de Josep Tarradellas, así como cesión de instalaciones para realizar una asamblea (documentos obrantes a folios 2.355 a 2.357 y 3.593 a 3.595, que se dan por reproducidos).

Los anteriores escritos han sido contestados por el Departament demandado, mediante escrito de 9 de febrero de 2011, manifestando no reconocer a la sección sindical constituida, al no ser los demandantes trabajadores del Departament (escrito obrante a folios 2.376 a 2.377, por reproducido)

En fecha 21 de enero han interesado del Departament demandado una reunión para tratar diversas cuestiones laborales y en fechas siguientes, hasta mayo de 2011, los actores han presentado varios escritos al Departament solicitando documentación y formulando quejas (documentos obrantes a folios 2.378 y siguientes).

En mayo de 2011 los actores han formulado demanda judicial contra las ahora demandadas, en materia de cesión ilegal de trabajadores, que ha correspondido al juzgado de lo social número 20 y que se encuentra archivada provisionalmente. Las reclamaciones previas y papeleta de conciliación administrativa previa a la anterior demanda se presentaron desde el 29 de diciembre de 2010 hasta el 1 de febrero de 2011 (documentos obrantes a folios 2.387 a 2.417, 3.405 a 3.418, 3.426 a 3.443 que se dan por reproducidos).

DÉCIMO OCTAVO .- Mediante escrito de 12 de abril de 2011 el Departament demandado se ha dirigido a **IECISA**, comunicando falta de espacio para el personal, debido a que había que asumir a empleados del anterior Departament, e interesando que traslade al personal técnico a otras dependencias, sin que ello suponga modificación de ningún otro aspecto del contrato (escrito obrante a folios 271, 696 y 1.001, que se da por reproducido). Consecuencia de ello, **IECISA** ha remitido sendos escritos, de fecha 2 de junio de 2011, a las codemandadas SERIKAT Y CAST-INFO, SA., comunicándoles que, por un proceso de reestructuración del Departament demandado, se hace necesario trasladar al personal técnico ubicado en sus dependencias, sin que ello comporte alteración del servicio prestado (comunicaciones obrantes a folios 340, 342, 758, 760 y 1015-1016).

Consecuencia de las anteriores comunicaciones, a partir de 6 de junio de 2011 los trabajadores de la empresa SERIKAT que prestaban sus servicios en el Departament demandado, entre ellos los actores Mariano y Millán , han pasado a prestar los servicios en las instalaciones de la mercantil **IECISA**. Y el actor Rafael ha pasado a prestarlos en las instalaciones de CAST-INFO, SA. (no controvertido).

DÉCIMO NOVENO .- En asamblea de 11 de junio de 2011 de la sección sindical de **CNT** de la empresa SERIKAT se ha acordado convocar huelga del día 20 al 28 de junio de 2011, comunicándolo a todas las codemandadas, salvo CAST-INFO, SA., y a la Delegació de Treball, en 17 de junio de 2011 (documentos obrantes a folios 2.425 a 2.427, que se dan por reproducidos).

Los actores Mariano y Millán han participado en la huelga a partir de 20 de junio de 2011 y a partir de 21 de junio han presentado una serie de denuncias ante la Inspección de Trabajo (denuncia e informe de la Inspección, folios 2.429 a 2.443, que se dan por reproducidos).

VIGÉSIMO .- Mediante sendos escritos de 17 de junio y de 20 de junio de 2011, **IECISA** ha notificado respectivamente a SERIKAT y a CAST-INFO, SA., la extinción de los respectivos contratos suscritos en relación



a la prestación del servicio al cliente Departament de Política Territorial i Obres Públiques (hoy Departament de Territori i Sostenibilitat), por pretendidas quejas e irregularidades en la prestación del servicio (comunicaciones obrantes a folios 1599 y 1035, que se dan por íntegramente reproducidas).

Dicha resolución de los contratos no ha sido pacífica. Con CAST-INFO, SA. se estuvo negociando para reconducir la situación, pero no fue eficaz. La demandada SERIKAT ha formulado demanda frente a **IECISA**, en reclamación de indemnización por daños y perjuicios derivados de la extinción contractual antes referida (documentos obrantes a folios 1.804 y siguientes).

Consecuencia de las referidas extinciones de los contratos, las codemandadas SERIKAT y CAST-INFO, SA. han procedido al despido objetivo de los trabajadores que prestaban servicios en el Departament demandado, entre ellos los actores.

VIGÉSIMO PRIMERO .- En la medida en que **IECISA** tenía contratado el servicio hasta 31 de diciembre de 2011, tuvo que realizar una nueva subcontrata con otra empresa, que a su vez contrató a despedidos de SERIKAT, distintos de los actores, que ya prestaban el servicio (contestación a las demandas por parte de **IECISA**).

VIGÉSIMO SEGUNDO .- Los actores han presentado papeletas de conciliación administrativa previa en fecha 21 de julio de 2011, celebrándose el intento conciliatorio sin avenencia en fecha 11 de agosto de 2011 (folios 26 y 427). Y han formulado reclamación previa ante la Administración en fecha 22 de julio de 2011, sin que conste resolución expresa de la misma (folios 27 a 34 y 428 a 435).

VIGÉSIMO TERCERO .- El actor Rafael ha prestado servicios para tercera empresa desde 25/06/2012 hasta 02/10/2012 (ARELANCE, SL.) y desde 01/10/2012 (GLOBAL DESIGNER DEVELOP, SL.) (informe de vida laboral, folios 1.373 a 1.375)."

SEGON. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

"Que estimando en parte la demanda formulada por Don Mariano , Don Millán y Don Rafael contra SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, SA., CAST-INFO, SA., INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA., CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ y GENERALITAT DE CATALUNYA (Departament de Territori i Sostenibilitat), habiendo sido citado el Ministerio Fiscal, procede declarar la existencia de cesión ilegal de trabajadores, en que las cedentes serían las empleadoras de los demandantes, SERIKAT Y CAST-INFO, SA. y las cesionarias las restantes demandadas y declarar la nulidad de los despidos de que han sido objeto los trabajadores demandantes, por violación de derechos fundamentales, con la consiguiente condena solidaria a todas las demandadas a estar y pasar por dichas declaraciones y a readmitir a los actores en sus puestos de trabajo en las mismas condiciones que tenían antes del despido, debiendo reintegrar los trabajadores las indemnizaciones percibidas con ocasión de los despidos objetivos, una vez firme esta sentencia, y a abonarles los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de la readmisión, de los que se deducirán los percibidos por prestación de servicio para tercera empresa, integrándose los actores en la plantilla de la demandada por la que ellos opten, con los mismos derechos y obligaciones de los trabajadores de ésta y con las circunstancias de antigüedad y categoría profesional que ostentaban en las respectivas empresas cedentes. Y condeno solidariamente a las codemandadas a abonar a cada uno de los trabajadores demandantes la cantidad de 6.551 euros, en concepto de indemnización de daños y perjuicios."

TERCER. En data 18 de juliol de 2013 es va dictar interlocutòria d'aclaració de la sentència anterior, la part dispositiva de la qual diu:

"Procede aclarar y aclaro el Fallo de la sentencia, en el sentido de que donde dice: "...integrándose los actores en la plantilla de la demandada por la que ellos opten, con los mismos derechos y obligaciones de los trabajadores de ésta y con las circunstancias de antigüedad y categoría profesional que ostentaban en las respectivas empresas cedentes...", debe decir: "**...integrándose los actores en la plantilla de la demandada por la que ellos opten, con los mismos derechos y obligaciones de los trabajadores de ésta y con las circunstancias de antigüedad y categoría profesional que ostentaban en las respectivas empresas cedentes, haciéndolo en la condición de trabajadores indefinidos, no fijos de plantilla, en el caso de que optaran por integrarse en el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya**".

QUART. Contra aquesta sentència les parts demandades, Serikat Consultoría e Informática S.A., Cast-Info S.A., Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Informática El Corte Inglés S.A. i Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya van interposar un recurs de suplicació, que van formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a les parts contràries. Les parts actors Mariano , Millán i Rafael van impugnar tots els recursos presentats. La part Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va impugnar també tots els recursos presentats excepte el propi i la part Cast-Info S.A. va impugnar el presentat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.



FONAMENTS DE DRET

PRIMER. Enfront la Sentència d'instància, que estimà en part la demanda interposada pels actors i declarà la nul·litat del seu acomiadament per causes objectives, s'interposa per les cinc codemandades Recurs de Suplicació.

La sentència d'instància va estimar en part la demanda fonamentant la seva decisió en els motius següents: a) que va existir cessió il·legal de treballadors per part de les empreses on treballaven formalment els actors, CAST-INFO, S.A. i SERIKAT CONSULTORIA E INFORMÁTICA, S.A. a favor de l'empresa INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A., i el DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA i el CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. b) Que va existir vulneració al seu dret a la indemnitat perquè els actors havien presentat indicis de que existia aquesta vulneració i les empreses no havien acreditat les raons objectives i raonables pel seu acomiadament i c) que tenien dret a una indemnització per danys morals, que es fixava en la quantitat de 6.261€ i també a ser indemnitzats per les despeses de la minuta del seu advocat, en la quantitat de 300€ per a cadascun.

SEGON. S'entrarà a examinar, en primer lloc el primer motiu de tots els recursos, en el que es demana la revisió del relat fàctic de la sentència, els quals es troben correctament emparats en l'apartat b) de l'article 193 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

Això no obstant, abans d'entrar al seu examen hem de recordar que aquesta Sala ha posat de relleu, en multitud d'ocasions, les exigències de les revisions fàctiques en suplicació, que es poden resumir en els requisits següents: 1) L'equivocació del jutjat s'ha de deduir de forma directa d'un element de prova documental o pericial. 2) S'ha d'assenyalar per la part recurrent el punt específic del contingut de cada document que posa de relleu l'error al·legat, raonant sobre la correcció del motiu, mitjançant una anàlisi que demostrï la correspondència entre la declaració continguda en el document i la rectificació que es proposa, 3) l'error ha de ser evident i s'ha de desprendre de forma clara, directa i inequívoca del document, sense que calgui fer deduccions, conjectures o suposicions i 4) l'error ha de ser transcendent per a modificar el sentit de la decisió de la resolució recorreguda, sense que es pugui utilitzar per a introduir qualificacions jurídiques predeterminants de la d'aquella.

Doncs bé, tenint en compte aquests principis s'ha d'entrar ara a examinar cadascuna de les modificacions. En primer lloc el Departament de Territori i Sostenibilitat sol·licita que s'afegeixin dos nous fets provats, que serien el setè bis i el vint-i-quatrè i que es modifiqui el tretzè.

Pel que fa al nou fet setè bis es proposa la redacció següent: "Que el servei es presta en la gestió de la plataforma de l'àrea Tic del Departament, tal i com detalla el Plec de condicions i "consiste en assegurar la disponibilidad de los sistemas informáticos que hacen posible que los usuarios dispongan en su lugar de trabajo de aquellas aplicaciones que sean necesarias para desarrollar su trabajo y actividad ordinaria" i que "las herramientas seran del Departament, ya que se trabaja sobre sus servidores, sus sistemas y sus redes". Que el Departament exigeix a les empreses licitadores que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries laborals i de Seguretat Social, que tot el personal que contractin estarà al seu càrrec i sota la coordinació exclusiva d'un responsable, que la gestió dels serveis informàtics correspon al CTTI, que ha d'haver la figura d'un coordinador, que la formació anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària, que els horaris i les vacances depenen de cada empresa. Es fonamenta en el contracte que es troba als folis 2.223 i següents.

La modificació ha de ser desestimada, perquè encara que és cert que en el contracte consta el que es vol afegir, no tindria cap transcendència per a modificar la decisió de la sentència impugnada, perquè el fonamental per decidir el present litigi, no és el que posa en el contracte, sinó el que veritablement va passar durant la prestació de serveis dels actors.

Pel que fa a la modificació del fet tretzè, es refereix a l'última frase del tercer paràgraf, el qual es demana es substitueixi per la següent: "... y participaban en las sesiones formativas e informativas en relación con las actuaciones a realizar en caso de emergencia en los edificios del Departament. La formación iba a cargo de las empresas subcontratistas". Basa la modificació en que el dit fet es fonamenta en una sèrie de correus electrònics que són de data anterior als fets que s'estan examinant en el present plet, per la qual cosa no es poden tenir en compte i, a més, van ser impugnats pel recurrent, i en els folis que assenyala.

Tampoc aquesta pretensió pot tenir èxit, perquè encara que és cert que alguns dels correus en que es basa el motiu són de data anterior als moments en que els actors van prestar serveis al Departament, la majoria són de les dates en que sí que ho feien. D'altra banda cal dir que encara que els dits correus fossin impugnats pel recurrent, aquest fet no impedeix que la magistrada els valori, d'acord amb el que disposa l'art. 326.2, de conformitat amb les regles de la crítica sana.



Per últim, es demana s'hi afegeixi un nou fet provat, que seria el vint-i-quatrè, pel qual proposa la redacció següent: "La Circular 1/2002, de 16 de maig, sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per part del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya és d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat i al personal que, sense tenir una vinculació laboral amb l'Administració de la Generalitat, hi realitza funcions de gestió i de manteniment dels sistemes d'informació informàtics. Aquesta circular regula la utilització del correu electrònic corporatiu i l'accés a les xarxes d'internet i intranet departamentals i corporativa". Es fonamenta en la dita Circular, que es troba als folis 2463, 2464 i següents i 2527.

És cert que en la dita Circular consta el que es vol afegir, però tampoc s'estima el motiu, perquè no pot tenir transcendència per a la resolució del present litigi.

TERCER. Per la seva part la codemandada CTTI sol.licita la modificació del fet dotzè, catorzè, quinze i setsè. Pel que fa al dotzè, únicament en el sentit d'afegir que el CTTi ha d'informar "tècnicament" als diferents Departaments i que li correspon la coordinació i comprovació dels contractes "si así se ha convenido". A més, sol.licita s'hi afegeixi el paràgraf següent: "Los Servicios del CTTI se contratan mediante concierto con el Departamento en cuestión, como en este caso con el Departamento de Territori i Sostenibilitat, por solicitudes de fecha 1/12/10 y 21/6/11". Es fonamenta en els documents que cita. És cert el que es vol afegir, però no s'admet la modificació, perquè no tindria cap incidència en la modificació de la decisió impugnada.

El mateix cal dir pel que fa a la modificació del fet catorzè, en el que es demana es substitueixi l'últim paràgraf, relatiu als requeriments Don. Ezequias , posant que aquests requeriments els feia "con ocasión de incidencias en el Servicio detectadas por el responsable del área técnica en el Departamento, Sr. Ezequias , incidencias que se comprobaban fruto de los Servicios de coordinación y comprobación de que se cumple el pliego del concurso para los que había sido contratado el CTTI por el Departamento de TiS", perquè tampoc no serien transcendents per a la modificació de la sentència recorreguda.

En relació amb el fet quinze, es pretén la modificació del segon paràgraf, en el sentit de que es digui que el Sr. Ezequias , en compliment dels serveis contractats, es coordinava amb la persona designada per **IECISA**, per la marxa del concurs i es realitzaven reunions i s'emetien informes amb freqüència variable. Apart d'això el Sr. Ezequias es dirigia al coordinador d'**IECISA**, quan era necessari, per incidències detectades en el servei per a que es solucionessin i només excepcionalment s'havia dirigit als treballadors per algun servei, sempre en funció de la urgència i importància de la incidència. Es fonamenta en una multitud de documents que enumera.

Per la seva part, l'empresa CAST INFO, S.A. també demana la modificació del fet quinze, sol.licitant la supressió del segon paràgraf. Es fonamenta en els folis 842 a 957, 961 a 967 i 971.

Les dues modificacions han de ser desestimades. Pel que fa a la proposada per CTTI perquè és evident que la Sala no pot revisar tots els correus que indica i, en tot cas, consta en el fet catorzè que el Sr. Eduardo , empleat d'**IECISA** es dirigia en alguna ocasió als actors, però sempre en funció dels requeriments del Sr. Ezequias , el que corrobora el que s'afirma en el fet impugnat, sense que s'observi cap error en la valoració de la prova per part de la magistrada d'instància. I aquesta última observació és també aplicable a la supressió sol.licitada per CAST INFO, S.A.

Per últim, CTTI demana la modificació del fet setzè, sol.licitant es digui que les vacances i altres festes dels actors les organitzaven amb les seves empreses, comunicant-ho al coordinador d'**IECISA**, que informava al Sr. Ezequias , responsable de l'àrea tècnica, per a que comprovés que es complia amb el plec del concurs i que el servei quedava cobert en la forma acordada, la qual es realitzava a través d'una "validació". Es fonamenta en els folis 3201 a 3226 de les actuacions. Tampoc aquesta modificació pot tenir èxit, perquè el que consta en el dit fet provat es fonamenta en els correus que assenyalen la magistrada, sense que existeixi cap error en la valoració de la dita prova.

QUART. Per la seva part SERIKAT demana que s'afegeixi al relat fàctic de la sentència dos nous fets provats. Pel primer es proposa la redacció següent: "Al tiempo de comunicar **IECISA** la extinción del contrato de prestación de Servicios SERIKAT carece de otros Servicios que permitan ocupar a profesionales con perfiles de técnicos de sistemas como los que ostentan los actores, ya que la actividad que mantiene se corresponde con Servicios de recogida, grabación y tratamiento de datos, para los que se emplean perfiles de auxiliares o grabadores". Es fonamenta en els documents 16 i 17 que va aportar com a prova.

La pretensió ha de ser desestimada, perquè es fonamenta en documents que han estat confeccionats per la mateixa empresa, per la qual cosa no poden acreditar el que es vol afegir.

Així mateix demana s'hi afegeixi un altre nou fet pel qual proposa la redacció següent: "La empresa SERIKAT viene sufriendo pérdidas económicas sucesivas con el siguiente detalle: Ejercicio 2009, -147.329€, 2010,



-272.952€ i 2011 -99.253€". Es fonamenta en els informes d'auditories de comptes dels anys 2009 i 2010 i el compte de pèrdues i guanys provisionals de l'any 2011.

Per últim, es pretén la modificació del fet prova vuitè, al qual proposa s'hi afegeixi un nou paràgraf, amb la redacció següent: "Al amparo de los contratos suscritos entre **IECISA** y SERIKAT, los Servicios se atendían en función de las especificaciones de trabajo emitidas en las que se determinan las tareas a ejecutar y los objetivos de Servicio a cumplir".

Tampoc es pot accedir a les dites pretensions perquè no tindrien cap tipus de transcendència per modificar la decisió de la resolució impugnada, tal com posteriorment es raonarà.

També en el recurs presentat per **IECISA** es sol·licita la modificació de l'últim paràgraf del fet provat vuitè, en el sentit de que es digui la data en que la recurrent va subscriure els contractes amb CAST-INFO i SERIKAT, que regulen les condicions dels serveis informàtics contractats i que consti que a CAST-INFO el preu del servei era fix, de 56.547,60€ i el de SERIKAT era per hores. Es fonamenta en els documents que es troben als folis 697 a 720 de les actuacions.

No cal modificar el fet citat pel que fa a SERIKAT, perquè la modificació que es proposa no té cap tipus de rellevància, perquè aquest fet ja consta i pel que fa a la referència a CAST-INFO és cert el que es vol afegir, per la qual cosa s'accepta la seva inclusió.

Així mateix es demana la modificació del fet provat vintè, primer paràgraf, en el sentit de que s'expliqui més extensament els motius assenyalats pel Departament de TIS per extingir el contracte amb la recurrent, el que s'haurà de desestimar, perquè no tindria cap transcendència per modificar la sentència d'instància i perquè es fonamenta en els mateixos documents en que ha basat la magistrada d'instància el dit fet, sense que s'observi cap error en la valoració de la prova.

CINQUÈ. Seguidament s'entrarà a examinar el primer motiu del recurs interposat per **IECISA**, el qual es troba correctament emparat en l'apartat c) de l' art. 193 de la LRJS, en la que es denuncia la infracció de l' art. 1.2 i 42 de l'Estatut dels Treballadors, en relació amb els articles 17.1, 80.1 b) i concordants de la llei processal laboral, en no apreciar-se en la sentència recorreguda l'excepció de manca de legitimació passiva de la recurrent.

Argumenta l'empresa que a la data de l'extinció dels contractes dels actors per causes objectives no existia cap tipus de relació laboral o de dependència dels actors amb **IECISA**, com es pot comprovar dels fets provats segon a sisè de la sentència, perquè els actors prestaven serveis per les codemandades SERIKAT i CAST-INFO i no es pot oblidar que es tracta d'una acció d'acomiadament, encara que interessin la declaració d'existència de cessió il.legal de treballadors entre empreses, per la qual cosa es tracta d'una qüestió prèvia o prejudicial interna, la qual cosa suposa una acumulació indeguda d'accions i, en tot cas, en el present procediment no existeix cap relació entre les empreses, per la qual cosa no és aplicació l' art. 43 ni el 42 de l'ET.

El motiu ha de ser desestimat amb tota contundència. És evident que en el present litigi la recurrent ostenta la legitimació "ad causam" passiva, perquè és l'empresa que va signar amb el Departament de TIS el contracte de prestació de serveis que al final van realitzar els demandants i encara que és cert que els actors mai no van tenir cap tipus de relació laboral amb la recurrent, aquest fet no implica la manca de legitimació, perquè precisament el que s'ha d'esbrinar en el present litigi és per a qui treballaven els actors, amb independència de qui era el seu empresari formal.

Pel que fa a la acumulació indeguda d'accions, també s'ha de desestimar, perquè tal com argumenta la pròpia recurrent, es tracta d'una qüestió prejudicial interna que s'ha de resoldre en el procediment d'acomiadament, amb caràcter previ a la decisió sobre el dit acomiadament, per tal de decidir sobre quines de les entitats demandades ha de recaure els efectes de la decisió sobre aquesta qüestió, en el supòsit de que aquest es declari improcedent o nul.

SISÈ. En l'únic motiu del recurs interposat pel Departament de GIs, emparat correctament en l'apartat c) de l' art. 193 de la LRJS es denuncia la infracció de l'art. 42 de l'Estatut dels Treballadors per no aplicació, perquè el recurrent mai no ha subscrit cap tipus de contracte laboral amb els actors, ni es donen les notes característiques de la relació laboral entre els actors i l'Administració, per la qual cosa no ens trobem davant d'un supòsit de cessió de treballadors prevista a l' article 43.2 de l'ET, sinó d'una subcontractació prevista en l' art. 42 del mateix Estatut i argumenta, en síntesi, que el Departament és qui adjudica els contractes administratius d'acord amb el que preceptua la Llei 30/2007, de 20 d'octubre de contractes del sector públic i és qui ha pagat els serveis, però qui ha gestionat aquest contracte amb les empreses codemandades és el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, per la qual cosa si algú ha actuat com a empresari han estat les empreses codemandades i en especial el CTTI, atès que l'única persona que donava ordres efectives de treball diari als demandants i a l'única persona a qui aquest donaven compte de la seva activitat, era el Sr. Ezequias, empleat del CTTI.



També argumenta que es cert que els actors treballaven als locals del Departament, d'acord amb el que disposava el contracte amb **IECISA**, però posteriorment es va sol·licitar al contractista un canvi d'ubicació dels treballadors, amb motiu de la reestructuració del personal del Departament. El recurrent no els va donar cursos de formació, sinó únicament la informació necessària en quan al Pla d'Emergència. És cert que tenien un compte de correu corporatiu de caràcter nominal, però aquest compte també es facilitava a terceres persones que temporalment han de desenvolupar alguna activitat al Departament i pel que fa als mitjans de treball reconeix que els utilitzaven perquè era imprescindible. Per últim, que en cap cas els actors es podrien incloure en el personal del Departament perquè no poden accedir a una Administració Pública sense superar els concursos corresponents.

Per la seva part, el segon motiu del recurs interposat per CTTI també es dedica a denunciar la infracció de l'art. 43 de l'ET i afirma que s'ha de tenir en compte la més recent jurisprudència sobre aquesta figura, fent referència a la STS de Madrid de 6.2.2012 i argumenta que el Sr. Ezequias no concedia les vacances als demandants, sinó que únicament les validava per veure si el servei quedava cobert i que l'entitat recurrent va estar contractada pel Departament per exercir les funcions que té atribuïdes per una norma legal com és el RD 26/1999, de 9 de febrer i entre les funcions contractades està la de coordinació i supervisió de la bona execució dels serveis contractats, per la qual cosa en cap cas es pot condemnar a la recurrent, que és totalment aliena a la relació mercantil entre les empreses codemandades.

Sobre aquesta qüestió està dedicat també el segon motiu del recurs interposat per CAST-INFO, S.A. en el que afirma que es tracta d'una empresa real que no s'ha acreditat que les instruccions del treball les donés el Sr. Ezequias, que els mitjans eren del Departament, perquè així ho imposava el contracte del propi Departament de GIS i ja consta en el fet provat vintè que el servei no es podia fer remotament, que el control de vacances les feia la recurrent i que la valoració de les proves s'ha de fer amb rigor, sense fer interpretacions extensives.

Per la seva part Serikat, encara que no dedica cap motiu a aquest tema, si que afirma que no ha existit cessió il·legal, atès que no es pot entendre com a tal el servei externalitzat que per les seves pròpies característiques exigeix d'una interlocució plena i intensa amb el client pel seu funcionament.

I, per últim, **IECISA** argumenta que si els actors treballaven en els locals del Departament era perquè així es va acordar en el contracte, però que també ho podien fer fora dels dit locals, com així va ser durant el mes de juny de 2011, que si els treballadors rebien instruccions del Sr. Ezequias era perquè era el responsable de l'Àrea Tècnica del Centre assignat per la Generalitat a la supervisió dels treballs d'informàtica i que en els serveis informàtics és molt freqüent la contractació entre operadors, amb la finalitat de comptar amb les persones adequades, per la qual cosa la recurrent va contractar els serveis de les codemandades CAST-INFO i SERIKAT, que són empreses reals, i, en conseqüència el motiu s'havia d'estimar.

Per resoldre la dita qüestió cal transcriure, en primer lloc, el que estableix l'art. 43.2 de l'ET *"En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadoras contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario"*.

Tal com ha assenyalat aquesta Sala en la sentència de data 9 d'octubre de 2013 (R. 894/2013), amb cita de la sentència de data 10 de maig de 2001, *"En la contrata el objeto contractual es la realización de una obra o servicio, de tal manera que el contratista es un empresario que asume el encargo de ejecutarlo a cambio de un precio que satisface el comitente, empresario principal, que opta por descentralizar parte de su actividad empresarial"*. D'altra banda, la sentència del Tribunal Suprem de data 17 de gener de 1992 entén que existeix una contracta quan *«la empresa contratista ejerce actividad empresarial propia y cuenta, por tanto, con patrimonio, instrumentos, maquinaria y organización estables»*, apart de *«mantener a los trabajadores de su plantilla dentro del ámbito de su poder de dirección»*.

Pel contrari, la cessió de mà d'obra es caracteritza pel fet que l'objecte mateix del contracte és la cessió del treballador, per part de qui apareix formalment com empresari, a qui rep realment la utilitat del treball d'aquell, de tal manera que "l'activitat empresarial" de l'empresa que cedeix consisteix únicament en contractar per a cedir o prestar, sense necessitat de mantenir cap estructura productiva com organització i mitjans que la suportin.

No obstant això, el Tribunal Suprem en la seva sentència de data 14 de setembre de 2001 ha dit que quan la contracta es concreta en una prestació de serveis que té lloc en el marc de l'empresa principal, no és fàcil diferenciar-la de la cessió, el que s'agreja perquè en la pràctica es recorre a les contractes com un mitjà formal d'articular un acord de facilitació de treballadors entre el cedent i el cessionari i és difícil reconèixer,



en les circumstàncies de cada cas, el límit entre un subministrament de treballadors i una descentralització productiva lícita. Per això, la doctrina judicial ha hagut de recorre a l'aplicació ponderada de diversos criteris de valoració que no s'exclouen, sinó que són complementaris i que tenen un valor indicatiu u orientador.

Es poden citar, entre altres, la justificació tècnica de la contracta, l'autonomia del seu objecte, l'aportació de mitjans de producció propis (sentència de 7 de març de 1988), l'exercici dels poders empresarials (sentències de 12 de setembre de 1988 , 16 de febrer de 1989 , 17 de gener de 1991 i 19 de gener de 1994) i la realitat empresarial del contractista, que es posa de manifest en relació amb dades de caràcter econòmic (capital, patrimoni, solvència, estructura productiva...). A aquest últim criteri es refereix també la Sentència de 17 de gener de 1991 que aprecia la concurrència de la contracta quan *«la empresa contratista ejerce actividad empresarial propia y cuenta, por tanto, con patrimonio, instrumentos, maquinaria y organización estables»*, apart de *«mantener a los trabajadores de su plantilla dentro del ámbito de su poder de dirección»* i en sentit similar es pronuncia la Sentència d'11 d'octubre de 1993 , que es refereix a l'aparença o ficció d'empresa com una *«característica del supuesto de cesión ilegal»*.

Però això no significa que només en el cas d'empreses aparents, sense patrimoni ni estructura productiva rellevants, es pugui donar la cessió. Com a fenomen d'interposició de caràcter jurídic, la cessió pot actuar completament al marge de la realitat o solvència de les empreses. Així la sentència de data 16 de febrer de 1989 establí que la cessió es pot donar *«aun tratándose de dos empresas reales si el trabajador de la una trabaja permanentemente para la otra y bajo las órdenes de ésta»* i la sentència de 19 de gener de 1994 assenyalava que, encara que s'hagi acreditat que l'empresa que facilita personal a una altra té una activitat i una organització pròpies, el que és rellevant, en relació amb la cessió, consisteix en que aqueixa organització *«no se ha puesto en juego»*, limitant-se la seva activitat al *«suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo»* a l'empresa arrendatària. El mateix criteri es reitera en la Sentència de 12 de desembre de 1997 .

L'actuació empresarial en el marc de la contracta, és, per tant, un element clau de qualificació, encara que, excepcionalment, l'exercici formal del poder de direcció empresarial pel contractista no sigui suficient per a eliminar la cessió, si s'arriba a la conclusió que aquell no és més que un delegat de l'empresa principal. Tal com ha assenyalat la sentència de data 8 de setembre de 1999 , que recull d'altres anteriors, *«el hecho de que la empresa contratista cuente con organización e infraestructura propias no impide la concurrencia de cesión ilícita de mano de obra si en el supuesto concreto, en la ejecución de los servicios de la empresa principal, no se han puesto en juego esta organización y medios propios, limitándose su actividad al suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de tal servicio»*.

La citada doctrina ha estat reiterada per les sentències posteriors de (SSTS 17/07/93 -rcud 712/92 -; 19/01/94 -rcud 3400/92 -; 12/12/97 -rec. 3153/96 -; 03/02/00 - rec. 1430/99 -; 16/06/03 -rcud 3054/01 -; 11/11/03 (-rec. 3898/02 -; 20/09/03 -rcud 1741/02 -; 03/10/05 -rcud 3911/04 -; 30/11 / 05 -rcud 3630/04 -; 14/03/06 -rcud 66/05 -; 24/04/07 -rcud 36/06 -; 21/09/07 -rcud 763/06 -; 26/09/07 -rcud 664/06 -; y 04/12/07 (- rcud 1377/06 -) i 4/3/2008 i la més recent de data 19.6.2012 (R. 2200/2011) en la qual, després de citar les sentències anteriors que han estudiat aquesta qüestió, es remarca el següent:

"La finalidad que persigue el artículo 43 Estatuto de los Trabajadores es que la relación laboral real coincida con la formal y que quien es efectivamente empresario asuma las obligaciones que le corresponden, evitando así que se produzcan determinadas consecuencias que suelen asociarse a la interposición, como son la degradación de las condiciones de trabajo cuando la regulación profesional vigente para el empresario formal es menos beneficiosa para el trabajador que la que rige en el ámbito del empresario real, o la disminución de las garantías cuando aparecen empleadores ficticios insolventes. Pero ello no implica que toda cesión sea necesariamente fraudulenta por ocultar a la empresa real y solvente a través de una empresa ficticia o por perseguir un perjuicio para los derechos de los trabajadores".

Per últim, cal remarcar que un altre indicatiu de que existeix cessió il.legal i no una descentralització productiva és quan la feina que fan els treballadors no té una rellevància o bé una qualificació especial, sinó que és la mateixa que fan o que podrien fer altres treballadors de l'empresa.

SETÈ. Doncs bé, aplicant l'esmentada doctrina al present supòsit, la Sala entén que a la vista dels fets provats la relació contractual entre les tres empreses recurrents i el Departament de Territori i Sostenibilitat no es pot qualificar com una contracta de serveis, sinó que va existir una veritable situació de cessió il.legal de treballadors.

Certament, no hi ha cap tipus de dubte en relació al fet de que les empreses que eren les titulars formals del contracte de treball dels demandants, CAST-INFO, S.A., en relació amb el Sr. Rafael i SERIKAT en relació amb els Srs. Mariano i Millán , són empreses amb activitat i organització pròpies, tal com consta en els fets provats vuitè i novè, que comptem amb instal.lacions pròpies i amb una plantilla de treballadors, però també ha quedat acreditat en la resolució impugnada, que aquesta organització empresarial no s'ha posat en joc,



limitant-se la seva activitat a subministrar a **IECISA** i aquesta al Departament abans citat, la mà d'obra per a desenvolupar part de les funcions informàtiques que es realitzen en el centre de treball d'aquest últim, tal com es posa de relleu amb les dades següents:

1) La relació laboral dels dos treballadors de SERIKAT, s'ha basat en un contracte de treball realitzat en forma escrita per temps determinat per a l'execució d'una obra o servei, que tenia per objecte "para **IECISA**. Proyecto "Administración de los Sistemas informáticos del Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya en entorno Windows", que posteriorment es va transformar en indefinit" (fet provat primer), amb la categoria de Tècnic de sistemes. El treballador Sr. Eduardo va iniciar la prestació de serveis per CAST-INFO el 25.8.2009, també com a tècnic de sistemes.

2) Els treballadors sempre han realitzat la seva feina en el centre de treball del Departament de TiS, als carrers Josep Tarradellas i Aragó, des l'inici de la seva relació laboral i fins el mes de juny de 2011 (fets provats 10è i 13è), utilitzant els útils de treball, equips, ordinadors i programes propietat de la Generalitat, d'acord amb el plec de condicions, fins el mes de juny de 2011. Tenien accés a la intranet del Departament i compte de correu electrònic de la Generalitat (f.p. 13è).

3) Les vacances i la resta de permisos les gaudien els treballadors quan el Sr. Ezequias, que era la persona responsable de l'Àrea Tècnica del codemandat CTTI, ho aprovava i ho comunicava al Sr. Eduardo, de **IECISA** (f.p. 16è). És cert que SERIKAT i CAST-INFO, S.A. tenien un control de les vacances, permisos i inassistències dels actors, però el tenien fonamentalment per a controlar el nombre d'hores que treballaven, tal com afirma la magistrada en el fonament de dret quart.

4) Els demandants realitzaven la seva feina, sota la direcció i supervisió del Sr. Ezequias, que revisava el seu treball i els donava les ordres i instruccions adients (fet provat 15è), encara que de vegades el Sr. Eduardo, empleat de **IECISA** es dirigia als actors per fer-los indicacions relatives al treball, però sempre en funció dels requeriments fets pel Sr. Ezequias (f.p.14è).

5) El Departament de TiS els facilitava la formació, juntament amb el seu personal (fet provat 13è).

6) Abans de que s'adjudiqués a la demandada **IECISA** la prestació dels serveis TIC de la Generalitat, s'havia adjudicat directament a la demandada SERIKAT. D'altra banda, quan **IECISA** va extingir el contracte que mantenia amb les dues empreses codemandades, els dies 17 i 20 de juny de 2011 (f.p. 20è), va haver de realitzar una nova subcontracta amb una altra empresa, la qual va contractar als treballadors acomiadats per SERIKAT, diferents dels actors, que ja prestaven el servei (f.t. 20è).

7) SERIKAT facturava els treballs que realitzaven els seus treballadors a **IECISA** per hores treballades, sense tenir en compte cap altre consideració. D'altra banda, aquesta última empresa pagava a la codemandada CAST-INFO una quantitat fixa per les funcions que realitzava el seu treballador.

De tots aquests fets s'extreu la conclusió necessària que en el cas estudiat s'ha produït una cessió il.legal de treballadors, regulada en l'article 43 de l'Estatut dels Treballadors, tal com va decidir la magistrada d'instància, és a dir, una externalització aparent d'una part dels serveis tècnics informàtics del Departament de TiS. El fet principal a tenir en compte, no es tant el que els actors prestessin els seus serveis en el centre de treball del dit Departament, (fins que es va decidir que ja no hi tenien lloc per fer-ho en el mes d'abril de 2011, f.t. 18è), ni que utilitzessin els seus mitjans, que d'altra banda és cert que era imprescindible, tal com posa de relleu l'esmentat Departament, sinó que -com s'ha dit abans- el fonamental és que la feina la realitzessin sota les ordres i la direcció d'una persona que també treballa per la Generalitat, encara que en un altre Centre especialitzat com és CTTI, sense cap tipus de diferència respecte els seus propis treballadors i que les empreses codemandades no coneguessin el treball que realitzaven els seus treballadors diàriament, ni els donessin, en conseqüència, cap tipus d'ordres, atès que encara que s'ha acreditat que existeix una persona, el Sr. Eduardo, empleat de **IECISA**, que era el responsable de la dita empresa del projecte adjudicat per la Generalitat de Catalunya, consta que aquest únicament es dirigia als actors, en alguna ocasió, per fer-los indicacions relatives al treball, però sempre en funció dels requeriments del Sr. Ezequias abans citat.

És cert que qui assumia les obligacions contractuals i de Seguretat Social amb els treballadors codemandats eren les empreses que els havien contractat formalment, és a dir SERIKAT i CAST-INFO, S.A., però aquest fet no té cap tipus de rellevància en front de les característiques de la relació laboral abans citades que demostren àmpliament l'esmentada cessió il.legal.

El mateix cal dir en relació a **IECISA** que és l'empresa que va contractar directament amb la Generalitat la prestació dels serveis TIC en el Departament de TiS i que en cap cas s'ha acreditat que tingués la direcció concreta dels treballs que realitzaven els demandants.

En conseqüència, el motiu s'ha de desestimar pel que fa al Departament TiS i les empreses codemandades.



VUITÈ. Diferent és el cas del codemandat CTTI. En aquest cas es tracta d'un organisme creat per la Generalitat de Catalunya que té atribuïdes una sèrie de funcions per una norma legal com és el RD 26/1999, de 9 de febrer. Concretament les que consten en l'art. 3 del dit RD i que són les següents: "El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació gestionarà de forma directa o indirecta la implantació, la gestió i l'explotació dels serveis, els sistemes i les xarxes de telecomunicacions i telemàtiques que siguin necessàries per al funcionament de la Generalitat de Catalunya i de les entitats, organismes i empreses que en depenen".

Així mateix, l'art. 5 del dit RD estableix que "El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació facturarà per al compliment de les seves funcions els serveis que presta als diferents organismes de la Generalitat de Catalunya segons les tarifes aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Aquestes hauran de ser suficients per cobrir els cost complet de la prestació dels serveis i inclouran el cost ordinari de l'explotació, les amortitzacions tècniques dels immobilitzats, els costos financers de les inversions i el cost de l'estructura de l'empresa".

I va ser d'acord amb aquesta norma que aquest Centre va ser contractat pel Departament de Territori i Sostenibilitat per tal de que efectués la coordinació i supervisió de la bona execució dels serveis informàtics contractats amb **IECISA**, per la qual cosa és evident que en cap cas es pot entendre que amb el dit centre existeixi la figura de cessió il.legal de treballadors, perquè encara que és cert que el Sr. Ezequias, empleat del Centre esmentat, és el qui donava les ordres efectives de treball diari als demandants i supervisava quan podien aquests realitzar les seves vacances i permisos, ho feia perquè era el responsable de que els serveis informàtics del Departament de TiS funcionessin correctament, d'acord amb les funcions que té atribuïdes i el contracte signat amb l'esmentat Departament, però cap més vincle existia entre el dit CTTI i els demandants.

No existeix, en conseqüència en la relació entre el citat centre i els treballadors demandants cap aprofitarem il.legal de la seva força de treball, sinó únicament una relació professional derivada de la relació contractual entre el Departament codemandat i el dit Centre, per la qual cosa el motiu ha de ser estimat, absolut al Centre citat de les pretensions de la demanda.

NOVÈ. Les tres empreses codemandades dediquen un apartat del mateix motiu a denunciar la infracció dels arts. 52 c) i 53 de l'ET i al.leguen el següent:

CAST INFO, S.A. que va ser **IECISA** qui va decidir extingir els contractes tant amb SERIKAT com amb ella mateixa i que aquesta decisió no va ser pacífica, tal com es va acreditar, per la qual cosa va existir un motiu real de l'extinció del contracte del seu treballador, que elimina sostenir la violació de drets fonamentals, perquè el cert és que el volum de treball de la recurrent va disminuir, per la qual cosa és evident que l'acomiadament s'ha de declarar procedent. I que, en tot cas, el seu treballador no va participar en la vaga anunciada pels treballadors de SERIKAT.

Per la seva part SERIKAT reproduïx les mateixes al.legacions i al.lega que amb motiu de la finalització de la contracta amb **IECISA** va haver d'extingir el contracte de tots els 6 treballadors que prestaven serveis al Departament de TiS i va acreditar documentalment que en aquell moment no tenia altres serveis que pogués encomanar als actors, perquè la resta de serveis que té són de nivell tècnic inferior als dels actors i, a més, durant els anys 2009, 2010 i 2011 va tenir pèrdues, tal com consta en l'informe de l'Auditoria de Comptes anuals que va aportar a les actuacions, per la qual cosa es tracta d'una raó objectiva i res ha tingut a veure la recurrent amb la violació del dret de vaga dels treballadors, perquè en realitat la dita vaga tenia com objectiu aconseguir entrar a formar part del Departament i no tenia cap tipus de relació amb ella.

Per últim, **IECISA** al.lega que en base a la modificació del fet provat vintè, la conclusió a la que arriba la Magistrada d'instància seria diferent, atès que existia una raó objectiva per extingir els contractes amb les codemandades SERIKAT i CAST-INFO, S.A., concretament perquè el Departament de TiS es va queixar contínuament del servei que donava SERIKAT pel continu incompliment d'horaris, mala assistència tècnica i amb CAST-INFO pel nou model de relació en la prestació de serveis a causa de la deslocalització, com es va acreditar, per la qual cosa està acreditada l'absoluta desvinculació de la resolució dels contractes mercantils amb la vaga convocada pels actors, per la qual cosa l'extinció del seu contracte es pot declarar procedent o improcedent, però en cap cas nul.

Tampoc aquest motiu pot tenir èxit. És cert -tal com raona la magistrada d'instància- que la part que al.lega aquesta vulneració ha d'acreditar, com a mínim, que han existit indicis de la possible violació d'un dret fonamental, amb la qual cosa, tal com disposa l' article 181.2 de la Llei processal laboral, s'invertirà la càrrega de la prova i hauran de ser el demandats el qui acreditin que la mesura adoptada no ha tingut cap tipus de relació amb la vulneració al.legada.

Doncs bé, en el present litigi la Sala comparteix l'afirmació de la magistrada "a quo" de que aquests indicis es van aportar pels recurrents si tenim en compte que aquests van presentar demandes contra les entitats aquí



demandades en el mes de maig de 2011, on ja sol.licitaven la declaració d'existència de cessió il.legal, així com per la constitució de la Secció Sindical de **CNT** i sol.licituds relacionades amb l'activitat sindical i finalment per la sol.licitud de vaga dels actors que treballaven per Serikat (f.p. dissetè i dinovè).

Davant aquest indicis de que els acomiadaments dels actors es poguessin fonamentar en la vulneració al seu dret a la indemnitat, les demandades haurien d'haver acreditat que la causa per la qual van decidir extingir el seu contracte de treball era totalment aliena a la vulneració de l'esmentat dret fonamental. I això no es va aconseguir, perquè el que es va acreditar és que la contracta per a la prestació de serveis en el Departament demandat no finalitzava fins desembre de 2011. Que en el comunicat de 2 de juny de 2011 d'**IECISA** a les empleadores dels actors se'ls indica que aquests prestarien serveis en instal.lacions diferents a les del Departament, però que això no afectava a la resta de la contracta, que es mantindria com fins aleshores.

I malgrat això, només quinze dies després, el 17 de juny, després de la notificació de la vaga, es comunica a les empleadores dels actors que s'extingeixen les contractes per existir queixes i irregularitats, que no s'havien mencionat en absolut en les comunicacions anteriors i de les que no es va aportar cap prova a les actuacions. A més, extingides les contractes amb SERIKAT i amb CAST-INFO, la codemandada IECISA va haver d'efectuar una nova subcontracta per a la prestació dels serveis informàtics en el Departament, atès que la dita contracta no finalitzava fins el 31 de desembre de 2011, i es va acreditar que alguns treballadors de SERIKAT, diferent dels actors, han estat contractats per la nova subcontractista.

Per totes aquestes circumstàncies la Sala comparteix el raonament de la magistrada d'instància de que s'ha d'arribar a la conclusió de que l'extinció del contracte de treball dels actors, en dates 27 i 28 de juny de 2011, va ser una represàlia a l'exercici d'accions judicials i sindicals per part dels demandants, per la qual cosa és obligat declarar que la dita extinció constitueix un acomiadament nul per vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva i a la llibertat sindical, d'acord amb el que estableix l' art. 53.4 de l'ET , en relació amb els articles 24 i 28 de la CE .

És cert que la decisió de prescindir dels actors no prové de les codemandades CAST-INFO, S.L. i SERIKAT, sinó que prové de la decisió de **IECISA**, de rescindir la subcontracta signada amb aquelles, que es fonamenta en unes queixes del Departament que, en principi i com hem dit abans, no es van acreditar i també ho és que la rescissió de la contracta no va ser pacífica, perquè consta que l'empresa SERIKAT ha presentat una demanda contra **IECISA** per la decisió d'extingir la dita contracta. Així mateix cal compartir que aquelles empreses, en veure extingida la tan mencionada contracta en principi tenien un motiu vàlid per, al seu torn, extingir el contracte de treball dels demandants, tal com ha reconegut la jurisprudència en multitud de sentències, però aquesta al.legació, en el cas present, no es pot estimar perquè en haver-se estimat que existeix una clara cessió de treballadors, prohibida per l' art. 43 de l'ET , tal com s'ha raonat anteriorment, els empresaris, tal com disposa l'apartat 3 del dit article han de respondre solidàriament de les obligacions concretes amb els treballadors i amb la Seguretat Social, sens perjudici de la resta de responsabilitats, inclús penals que procedeixen pels actes esmentats i això amb independència de si el treballador de CAST-INFO, S.A. va participar o no en la vaga anunciada, perquè com hem dit anteriorment, la dita vaga no era l'únic indicati de que va existir una clara vulneració al dret a la indemnitat dels demandants.

Així mateix s'ha de desestimar l'al.legació d'**IECISA** de que és impossible la readmissió dels actors perquè la contracta amb el Departament va acabar el 31 de desembre de 2011, atès que una qüestió no comporta l'altra, ja que és evident que la finalització de la contracta on prestaven serveis els actors no suposa que l'empresa no els pogués recol.localar en un altre lloc de treball. En tot cas, es tracta d'una qüestió que s'hauria d'examinar en el moment de l'execució de la sentència.

DESÈ. Per últim, tant CAST-INFO, S.A. com CTTI argumenten que la sentència ha infringit el que disposa l' art. 183.1 de la LRJS . Argumenta la primera que en no haver-hi cap vulneració de drets fonamentals no procedeix la indemnització de danys i perjudicis i la segona que, a més, s'ha infringit la doctrina jurisprudencial pel que fa al principi "d'automaticitat indemnitzatòria", concretament fa referència a la STS de data 15.4.2013 i l' art. 15 de la LOLS i el principi "non bis in idem" i al.lega que la jurisprudència exigeix una acreditació de l'existència del perjudici i el seu abast i que en la demanda només es fa referència al criteri quantificador i que aquest, a més de no estar relacionat amb els danys morals concrets produïts, fa referència a l'import de la sanció per infracció greu prevista pels actes lesius dels drets que es diuen conculcats i, per últim, que en tot cas CTTI no pot ser condemnada al pagament de cap indemnització perquè no ha comès cap vulneració de drets fonamentals.

Censura jurídica que també s'ha de desestimar. Pel que fa a la qüestió al.legada per les dues recurrents de que no poden ser condemnades a pagar cap quantitat perquè no han vulnerat cap dret fonamental, s'ha de refusar pels mateixos raonaments fets anteriorment en relació amb la nul.litat de l'acomiadament.

I, en relació amb la quantitat a la que la magistrada ha condemnat a les demandades cal dir que la doctrina del Tribunal Suprem a la que fa referència la recurrent, relativa a la prova dels danys morals, per tal de quantificar



la indemnització. ha estat modificada posteriorment pel dit Tribunal. Així en la molt recent sentència de data 2.2.2015 (RC. 279/13), es diu el següent:

"2.- Ha de reconocerse que la doctrina de la Sala en orden a la cuestión de que tratamos -indemnización por vulneración de derechos fundamentales- no ha tenido la uniformidad que sería deseable, pasando de una inicial fase de concesión automática en la que se entendió procedente la condena al pago de la indemnización por los daños morales causados, sin necesidad de que se acredite un específico perjuicio, dado que éste se presume (así, SSTS 09/06/93 -rcud 3856/92 -; y 08/05/95 -rco 1319/94 -), a una posterior exigencia de bases y elementos clave de la indemnización reclamada que justifiquen suficientemente la misma y que estén acreditados indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pueda asentar la condena (SSTS 22/07/96 -rco 7880/95 -; ... 11/06/12 -rcud 3336/11 -; y 15/04/13 -rcud 1114/12 -).

Pero en los últimos tiempos esta doctrina de la Sala también ha sido modificada, en primer lugar atendiendo al criterio aperturista que actualmente informa el resarcimiento del daño moral [incluso se recomienda su aplicación en el ámbito de los incumplimientos contractuales por los PETL y por STS I 15/06/10 -rec. 804/06 -], y por la consideración acerca de la «inexistencia de parámetros que permitan con precisión traducir en términos económicos el sufrimiento en que tal daño [moral] esencialmente consiste ... [lo que] lleva, por una parte, a un mayor margen de discrecionalidad en la valoración ... y, por otra parte, "diluye en cierta medida la relevancia para el cálculo del quantum indemnizatorio" de la aplicación de parámetros objetivos, pues "los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados "no tienen directa o secuencialmente una traducción económica" [SSTS/Iª 27/07/06 Ar. 6548 ; y 28/02/08 -rec. 110/01 -]» (SSTS 21/09/09 -rcud 2738/08 -; y 11/06/12 -rcud 3336/11 -). Y sobre todo, en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras el art. 179.3 LRJS , precepto para el que la exigible identificación de «circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada» ha de excepcionarse -éste es el caso de autos- «en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada».

Criterios a los que ciertamente se adelantaba la Sala al afirmar que «dada la índole del daño moral, existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión... lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales ...» (SSTS 12/12/07 -rco 25/07 -; y 18/07/12 -rco 126/11 -).

3.- En la aplicación de estos criterios al caso debatido hemos de destacar que en la demanda, contrariamente a lo que en el recurso se argumenta, la parte accionante sí ha fijado -con el detalle que el daño moral puede permitir, conforme a lo dicho más arriba- los claros indicios del alegado daño y la innegable base para la pretendida indemnización, al afirmar -FJ 6- que «... la conducta antijurídica de la empresa llevó a que la CIG sufriese un daño moral, como consecuencia del menoscabo de su imagen y la privación de los medios necesarios para desarrollar su actividad sindical, viendo menguada su capacidad para tomar medidas de información, reacción o conflicto, y que por ello proponemos que se sancione a la empresa a abonar al sindicato la cantidad de 3.126 euros, utilizando como criterio el importe mínimo establecido para las infracciones graves, en su grado máximo, y que correspondería imponer a la empresa por vulnerar el artículo 7.8 de la ... LISOS ... que tipifica como infracción grave...». Entendemos que una mayor precisión en indicios de daño y bases de resarcimiento es -tratándose de daño moral- absolutamente inexigible, cuando no imposible.

4.- Y en lo que al concreto informe se refiere procede indicar: a) de un lado, que el importe de resarcimiento fijado prudencialmente por el órgano judicial de instancia únicamente debe ser corregido o suprimido cuando se presente desorbitado, injusto, desproporcionado o irrazonable (entre muchas más anteriores, SSTS 11/06/12 -rcud 3336/11 -; 05/02/13 -rcud 89/12 -; y 08/07/14 -rco 282/13 -), lo que obviamente no es el caso; y b) de otro, que la utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la LISOS para las infracciones producidas en el caso ha sido admitido por la jurisprudencia constitucional (STC 247/2006, de 24/Julio), a la par que considerado idóneo y razonable en precedentes decisiones de esta Sala (SSTS 15/02/12 -rco. 67011 -; y 08/07/14 -rco 282/13 -)".

Doncs bé, com es pot observar, aquesta doctrina és totalment aplicable al present litigi, en el qual, els actors demanen una indemnització prenent com a criteri orientador les sancions pecuniàries previstes per la LISOS, el que tant el Tribunal Suprem com el Tribunal Constitucional han admès i considerat un sistema idoni i raonable, per la qual cosa, s'ha de desestimar l'al·legació de que no es pot adoptar aquest criteri per a quantificar els danys morals. I, a més, tampoc la decisió de la magistrada d'instància es pot considerar irraonable o desproporcionada, per la qual cosa el motiu ha de ser totalment desestimat.

ONZÈ. La desestimació dels recursos interposats per les tres empreses comporta, d'acord amb el que estableix l' article 235.1. de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , imposar les costes processals a les dites empreses, inclosa la minuta del Lletrat impugnant del recurs, que es fixa en la quantitat de 400€ per a cadascuna d'elles. Així mateix procedeix acordar la pèrdua del dipòsit efectuat en el moment de recórrer i de



la quantitat consignada, a les quals es donarà el destí previst legalment, tal com disposa l'article 204.1 de la mateixa llei.

VISTOS els preceptes legals citats, els concordants i la resta de disposicions de general i pertinent aplicació,

DECIDIM:

Que hem de d'estimar i estimem el Recurs de Suplicació interposat pel CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA i hem de desestimar i desestimem els interposats per SERIKAT CONSULTORIA E INFORMÁTICA, S.A., CAST-INFO, S.A., INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. i DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, en data 28 de juny de 2013, que va recaure en les Actuacions 786/2011, en virtut de demanda presentada pels Don. Mariano, Millán i Rafael, contra les entitats esmentades i, en conseqüència hem de revocar i revoquem la resolució citada, únicament en el sentit d'absoldre al Centre abans citat de les pretensions de la demanda, mantenint la resta en els seus propis termes. S'imposen les costes processals a les tres empreses recurrents, inclosa la minuta del Lletrat impugnant del recurs, que es fixa en la quantitat de 400€ per a cadascuna d'elles. Així mateix procedeix acordar la pèrdua del dipòsit efectuat en el moment de recórrer i de la quantitat consignada, a les quals es donarà el destí previst legalment.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoni que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social, o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l'article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, consignarà com dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el BANC SANTANDER, en l'Oficina núm 2015 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, quan així procedeixi, s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest Tribunal, i havent d'acreditar que s'ha fet efectiva al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, la Magistrada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.